



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, marzo de 2023

Radicado: 05001 31 05-015-2020-00464-01
Demandante: MARÍA CONSUELO CARMONA DE HENAO
Demandados: COLPENSIONES Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

En los términos y para los efectos del poder conferido, se le reconoce personería para que continúe con la representación judicial de Colpensiones a la Dra. INGRIS RUIDIAZ SOTO portadora de la T.P 240.222 del C.S de la J.

Por estar ajustada a lo dispuesto en el artículo 76 del CGP, se acepta la renuncia al poder que presenta el Dr. JOSÉ A. FERNÁNDEZ GÓMEZ portador de la T.P 146.198 del C.S de la J quien venía representando judicialmente a la codemandada MUNICIPIO DE GIRARDOTA.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

El litigio giró en torno a determinar si el Municipio de Girardota debía emitir bono pensional con destino a Colpensiones por el tiempo de servicios prestado por el señor Pedro Pablo Henao Castrillón y si le asistía derecho a la señora María Consuelo Carmona de Henao al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por Colpensiones con ocasión al fallecimiento de su cónyuge. Consecuentemente, se estudiaría si era procedente la condena al interés moratorio establecido en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre las mesadas retroactivas o si, por el contrario, procedía la indexación sobre las mismas. De forma subsidiaria, se analizaría si a la demandante le asistía derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes debidamente indexada por parte de Colpensiones.

En decisión de primera instancia, se accedió a la pretensión subsidiaria condenando a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, al considerar que, conforme a lo dispuesto en la Ley 12 de 1975 el causante no dejó acreditados los presupuestos para que su cónyuge pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada.

Inconforme con la decisión adoptada por la juzgadora de instancia, fue oportunamente interpuesto y sustentado recurso de apelación por la parte actora, manifestando que la normatividad que debió ser aplicada correspondía al Decreto 3041 de 1966 y bajo esos presupuestos debían tenerse en cuenta para el requisito de semanas exigido, el tiempo de servicios que laboró el causante para el Municipio de Girardota en la medida que era su obligación afiliarlo al ISS y realizar los respectivos aportes y no lo hizo, razón por la cual con la sumatoria de ese tiempo se causaba la prestación pretendida.

ALEGATOS

Concedido el término que establecía el artículo 13 la Ley 2213 de 2022 la apoderada de la demandante arrima escrito donde insiste en que se debe dar aplicación a lo dispuesto en la sentencia SU 769 de 2014 para que se proceda con la sumatoria de tiempos

públicos y privados para así consolidar el derecho prestacional que ha sido negado por la falta de acreditación de las semanas mínimas requeridas; Colpensiones por su parte, manifiesta que el causante no cumplió con los requisitos exigidos en el Decreto 3041 de 1966 para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivencia.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver las controversias planteadas encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que el 23 de noviembre de 1968 el señor PEDRO PABLO HENAO CASTRILLÓN y la señora MARÍA CONSUELO CARMONA DE HENAO contrajeron matrimonio católico según registro civil que obra en el plenario sin nota de cesación de efectos civiles, ni liquidación de sociedad conyugal (pág. 27 del archivo 1); **2)** que el señor HENAO CASTRILLÓN falleció el 8 de octubre de 1983 (pág. 23 del archivo 1), **3)** que el señor PEDRO PABLO HENAO CASTRILLÓN cotizó al ISS un total de 211 semanas; **4)** que el causante laboró al servicio del Municipio de Girardota como trabajador oficial en el cargo de obrero desde el 22 de agosto de 1977 hasta el 8 de octubre de 1983 (pág. 75 del archivo 1), **5)** que mediante resolución 1649 del 2014, a la señora MARÍA CONSUELO CARMONA DE HENAO le fue reconocida y pagada por parte del MUNICIPIO DE GIRARDOTA indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en cuantía única de \$1.120.071; **6)** que el 27 de marzo de 2018 se agotó la reclamación administrativa ante Colpensiones, solicitud que fue despachada de forma negativa a través del acto administrativo SUB 127089 del 10 de mayo de 2018 (pág. 41/44 del archivo 1).

Bajo estas premisas y atendiendo a los aspectos objeto de apelación por la activa y dentro del grado jurisdiccional de consulta, corresponde a esta corporación determinar cuál la normatividad aplicable al caso concreto y si para el efecto de la contabilización de las semanas mínimas requeridas para que proceda el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, debe tenerse en cuenta el período laborado pero no cotizado al servicio del Municipio de Girardota.

Sea lo primero indicar que en acto administrativo SUB 155656 del 17 de junio de 2019 obra manifestación de la demandada que mediante investigación administrativa suministrada por el contratista COSINTE-RM COLCO – 168219 se logró acreditar que la señora MARÍA CONSUELO CARMONA DE HENAO convivió con el causante desde el 23 de noviembre de 1968 hasta el 8 de octubre de 1983, es decir, por espacio de 14 años, por lo tanto, está por fuera de discusión el requisito de convivencia en el presente asunto.

En relación con lo anterior, debe señalarse que a partir de lo previsto en el artículo 61 del CPL y en tanto para acreditar la calidad de beneficiario no se consagra solemnidad ad substantiam actus, la Sala Laboral de la Corte Suprema ha dicho que resulta razonable tener como tal a quien la entidad de pensiones acepta para efectos del reconocimiento de una indemnización sustitutiva (Radicado 31055 del 12 de diciembre de 2007, Radicado 3787 del 3 de febrero de 2010 – Radicado 42182 del 1 de noviembre de 2011, Radicado 44313 del 8 de mayo de 2013); precedente consolidado y que se reitera en sentencias como la SL 1278 de 2018 y SL 4531 de 2019, en el que se afirma con razón, que si es la misma entidad demandada la que acepta la calidad en el acto administrativo en el que se niega la pensión de sobrevivientes reclamada, para reconocer la indemnización de sobrevivientes, no queda la menor duda de la calidad de beneficiario respecto del afiliado fallecido y por ende la legitimidad con que cuenta para reclamar la pensión de sobrevivientes pretendida en el proceso.

Ahora, para dilucidar el asunto de autos y dada la fecha de fallecimiento del afiliado PEDRO PABLO HENAO CASTRILLÓN el 8 de octubre de 1983, se aplicará en principio la normatividad que para esa fecha se encontrara vigente.

El Decreto 3041 de 1966 que aprobó el reglamento general de seguridad social para los riesgos de invalidez, vejez y muerte dispuso en su artículo 1° acerca de los trabajadores que estarían sujetos de forma obligatoria al seguro social así:

“a. Los trabajadores nacionales y extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo presten servicios a patronos de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley o por el presente reglamento;

b. Los trabajadores que presten servicios a entidades empresas de derecho público semioficiales o descentralizadas cuando no estén excluidos por disposición legal expresa;

c. Los trabajadores que mediante, contrato de trabajo presten servicios a entidades de derecho público, en la construcción y conservación de las obras públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos o forestales, que aquellas entidades exploten directa o indirectamente o de los cuales sean accionistas o coparticipes;

d. Los trabajadores que presten servicios a un sindicato para la ejecución de un contrato sindical, caso en el cuál la entidad profesional se entiende patrono de los trabajadores.

(...)”

Por su parte, el Decreto 433 de 1971 que reorganizó el Instituto de Seguros Sociales, en su artículo 2° insistió en el Seguro Social Obligatorio de determinadas personas:

“a). Los trabajadores nacionales y extranjeros, que en virtud de un contrato de trabajo o de aprendizaje, presten sus servicios a patronos de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley;

Sin embargo, los asegurados que tengan sesenta (60) años o más al inscribirse por primera vez en el Seguro no quedarán protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni habrá lugar a las respectivas cotizaciones.

b). Los trabajadores que presten sus servicios a la Nación, los Departamentos y los Municipios en la construcción y conservación de las obras públicas, y todos los trabajadores de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter nacional, departamental o municipal, que para los efectos del Seguro Social Obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares.

(...)”

Además de lo anterior, para efectos de la asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, a través de la Resolución 884 de 1996 el Municipio de Girardota fue llamado para que, a partir del 2 de septiembre de 1968 se inscribieran de forma obligatoria los trabajadores al ISS en razón de la cobertura geográfica gradual.

Pues bien, de la normatividad y consideraciones hasta aquí descritas puede arribar la Sala a una primera conclusión y es que al momento del fallecimiento del señor HENAO CASTRILLÓN 8 de octubre de 1983, éste estaba vinculado como trabajador oficial en el cargo de obrero al servicio del Municipio de Girardota, por lo tanto, el Municipio en su calidad de empleador, estaba obligado a afiliarse a sus trabajadores al ISS y para el caso del causante omitió hacerlo.

En este punto es necesario hacer la salvedad que, esta Sala ha resuelto en casos similares realizar una excepción de constitucionalidad y dar aplicación a lo dispuesto en sentencia SU 769 de 2014 procediendo con la sumatoria de tiempos públicos y privados de que trata el Decreto 758 de 1990 bajo la conclusión que dicha aplicación residual resulta procedente cuando aquella sumatoria es necesaria para el reconocimiento pensional, ello sustentado en principios constitucionales de irrenunciabilidad, igualdad, favorabilidad y protección de los derechos mínimos e irrenunciables, dirigidos a otorgar la prestación como un derecho fundamental a la seguridad social y el mínimo vital.

Hoy el criterio que adopta esta Corporación atiende a que dada la condición del trabajador para el momento de su muerte (obrero – trabajador oficial) y la entidad para la cual estaba vinculado (pública del orden municipal), es claro que se presentó una omisión de afiliación, permitiendo validar los tiempos públicos, reiterando que por el tiempo de servicios ante el Municipio de Girardota, a saber, entre el 22 de agosto de 1977 hasta el 8 de octubre de 1983 no se hicieron aportes al ISS para las contingencias que éste cubría.

Finalmente, en reciente sentencia T 344 del 2021 La corte constitucional en un caso de similares contornos expresó:

La Sala considera que el precedente fijado por la Sentencia SU-769 de 2014 no es aplicable de forma directa al caso sub examine, porque (i) no existe identidad de objeto y (ii) el problema jurídico sustancial que resolvió la Sala Plena en esa oportunidad estaba relacionado con la posibilidad de acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas

o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al ISS para acceder a la pensión de vejez, en el marco del régimen de transición.

No obstante, dicha decisión sí constituye un precedente relevante para el análisis del presente caso, habida cuenta de que en esta oportunidad, el debate sustancial gira en torno a: (i) la posibilidad de acumular tiempos cotizados y no cotizados al ISS, (ii) la aplicación retrospectiva de la norma vigente respecto de situaciones acaecidas con anterioridad y (iii) el reconocimiento de una prestación económica derivada del derecho a la seguridad social.

96. *En esos términos, la Sala constata que el Decreto 3041 de 1966, modificado por el Decreto 232 de 1984, al igual que el Acuerdo 049 de 1990, no disponía nada sobre la acumulación de semanas o tiempos de cotización. Dicha posibilidad únicamente se incorporó al ordenamiento jurídico a partir de la Ley 71 de 1988 –aproximadamente un año después del fallecimiento del causante– y de manera definitiva, con la expedición de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, es razonable que existan dudas sobre si es posible acumular las semanas efectivamente cotizadas al ISS, con el tiempo aportado a entidades públicas, cuando se analiza una solicitud de pensión de sobrevivientes, que si bien se causó en vigencia del Decreto 3041 de 1966 con la muerte del afiliado, su reconocimiento y pago se decide en vigencia de la Ley 100 de 1993. Esto, porque la norma que estaba vigente para el momento del fallecimiento del causante no preveía dicha posibilidad, pero la norma que está vigente al momento de decidir sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge supérstite, sí lo permite.*

97. *Al igual que en el escenario previo a la expedición de la Sentencia SU-769 de 2014, en este caso existen dos posibles interpretaciones: la primera, según la cual no es posible acumular los tiempos de servicio cotizados al ISS con las semanas aportadas a la entidad territorial, porque el Decreto 3041 de 1966, que es la norma que regula el caso, no preveía dicha posibilidad. Esta interpretación, que es la sostenida por Colpensiones y por la Corte Suprema de Justicia, está sustentada en que las normas jurídicas, por regla general, solamente rigen y producen los efectos para los cuales fueron expedidas respecto de aquellos actos, hechos o situaciones de derecho que se constituyen con posterioridad a su entrada en vigencia.*

98. *La segunda interpretación, que sí admite la acumulación de tiempos laborados, se fundamenta en las siguientes razones:*

99. *(i) Del tenor literal de la sección b) del artículo 5 del Decreto 3041 de 1966, modificado por el artículo 1º del Decreto 232 de 1984, no se deriva necesariamente que el número de semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión de sobrevivientes debiera ser aportado de forma exclusiva al ISS.*

100. *(ii) Una de las finalidades esenciales de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, superar la desarticulación entre regímenes pensionales. Por esa razón, dicha ley permitió: (a) la acumulación de tiempos y semanas trabajadas, (b) la suma de semanas cotizadas a cualquiera de los regímenes para el reconocimiento y pago de la pensión, y (c) ampliar las posibilidades de acumular semanas y periodos laborales antes y después de su vigencia.*

101. *(iii) El principio de favorabilidad en materia laboral, derivado del artículo 53 de la Constitución Política, dispone que, en caso de dudas sobre la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, el operador judicial debe optar por la situación que resulte más favorable para el trabajador^[143]. Por otra parte, el principio pro homine, cuyo fundamento son los artículos 1 y 2 de la Constitución, implica que “las normas han de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de las personas”^[144]*

102. *(iv) La solicitud de pensión de sobrevivientes se está resolviendo en vigencia de la Ley 100 de 1993, en un caso en el que es posible constatar un riesgo de afectación al mínimo vital. En reiterada jurisprudencia^[145], la Corte Constitucional ha señalado que, en virtud del referido principio de favorabilidad, es posible aplicar de forma retrospectiva la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones cuando “el causante, a pesar de haber fallecido con anterioridad de la entrada en vigencia de [dicha] norma, ha cotizado por un número considerable de años al sistema de seguridad social [aproximadamente 12 años en el presente caso] y de las particulares condiciones de [la] accionantes se deduce que la implementación de la ley preconstitucional de seguridad social en concreto es una carga desproporcionada, que vulnera derechos iusfundamentales, tales como la seguridad social, el mínimo vital y la igualdad”^[146].*

103. *Por lo tanto, no es irrazonable, en virtud del principio de favorabilidad: (a) determinar si la accionante cumple los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes a la luz de lo previsto por el Decreto 3041 de 1996 –porque esa era la norma vigente al momento en el que se causó la pensión y la que establecía el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas necesario para acceder a la prestación, así como el monto correspondiente–; y, al mismo tiempo, (b) permitir la acumulación de las semanas, según lo dispuesto por la sección f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que se refiere a las reglas para el cómputo correspondiente de los tiempos, mas no a la aplicación favorable de otros requisitos sustanciales de acceso a la prestación.*

104. *En consecuencia, la Sala concluye que, en virtud de los principios pro homine, de favorabilidad y del principio de eficacia real de los derechos fundamentales, la segunda interpretación es la que permite materializar de manera adecuada los mandatos constitucionales y proteger los derechos fundamentales de la accionante. Por tal razón, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, es posible acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social o a las entidades públicas, con las semanas de cotización efectuadas al ISS, exclusivamente, en casos en los que el accionante: (i) acredite que el causante falleció en vigencia del Decreto 3041 de 1966, modificado por el Decreto 232 de 1984, (ii) solicite la pensión de sobrevivientes en vigencia de la Ley 100 de 1993, (iii) se encuentre en circunstancias en las cuales el proceso ordinario laboral no sea efectivo para proteger de manera oportuna sus derechos fundamentales y (iv) se advierta una afectación inminente de su derecho al mínimo vital.*

Las anteriores disposiciones permiten concluir que, una vez certificado por la codemandada los extremos en los que se mantuvo vigente la relación laboral, entre el 22 de agosto de 1977 hasta el 8 de octubre de 1983, y con la obligación de cotizar al ISS desde el 2 de septiembre de 1968, considera esta Sala de decisión que el MUNICIPIO DE GIRARDOTA, a través de cálculo actuarial que liquide la codemandada Colpensiones, debe representar el tiempo de servicios a efectos de que dichas semanas sean contabilizadas en la historia laboral del causante y dichos aportes sirvan para el financiamiento de la pensión que acá se reclama (ver además sentencia SU 226 de 2019), lo anterior, dando una aplicación retrospectiva a la figura del cálculo actuarial o título pensional para enmendar una situación jurídica que no pudo ser resuelta con la normatividad que le era aplicable (T-415 de 2017).

Se insiste en que no se genera detrimento patrimonial, debiendo destacarse que estas conclusiones no representan alguna contravención al principio de sostenibilidad financiera del sistema ni dan pie al reconocimiento de la prestación sin una base real de cotizaciones:

- Porque tal como se ha acreditado en el proceso, el Municipio de Girardota constituirá calculo actuarial o título pensional por el periodo en que omitió realizar las cotizaciones al ISS, trámite que COLPENSIONES adelantara.
- Esta decisión simplemente reconoce la realidad laboral del causante, y al razonar de otro modo solo se genera una clara desprotección para la beneficiaria, situación que la Constitución Política quiso corregir generando la promulgación de la Ley 100 de 1993, con la obligación de emisión y pago de bonos pensionales para financiar las prestaciones de la seguridad social
- Así la beneficiaria encuentra una cobertura y protección del sistema de seguridad social, a partir de una interpretación que emerge con contenido propio del principio protector de las normas de la seguridad social, así como de los postulados consagrados en la Constitución Política, y en particular de su artículo 53 que prohíbe el menoscabo de los derechos sociales.

Conforme a las consideraciones expuestas, procederá la Sala a verificar si con el tiempo de servicios en favor del Municipio de Girardota, el señor PEDRO PABLO HENAO CASTRILLÓN dejó acreditados los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto 3041 de 1966 que remite a lo dispuesto en el artículo 5 ibidem, para que su cónyuge beneficiaria accediera a la pensión de sobrevivientes, a saber, contar con 150 semanas cotizadas en los últimos 6 años o 75 semanas en los últimos 3 años.

Lo anterior conlleva a contabilizar que dentro de los 6 años anteriores a la muerte del causante, es decir entre el 8 de octubre de 1977 y el 8 de octubre de 1983, el afiliado fallecido alcanzó a laborar 2191 días que equivalen a 313 semanas, superando con creces el requisito exigido en la norma aplicable, permitiéndole acoger a la Sala los planteamientos esbozados en el RECURSO , para así **REVOCAR** la sentencia que se revisa, y en su lugar CONDENAR a COLPENSIONES al reconocimiento de la PENSION

DE SOBREVIVIENTES en favor de la señora MARIA CONSUELO CARMONA DE HENAO, en relación con el valor de la pensión, la Sala aplica el artículo 15 del Decreto 3041 de 1966:

El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33 la ciento cincuentava parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas ciento cincuenta semanas de cotización: \$13.016 que al aplicarle una tasa del 45%, para 513 semanas, se obtiene una mesada inicial por valor de \$5.857, valor que se advierte inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 1983.

Por esta razón la mesada será equivalente a un salario mínimo mensual y se concede con 14 mesadas al año, porque se causó antes del AL 1 de 2005.

Ahora bien, se advierte que si bien el derecho se causó en el año 1983 y la última reclamación la hizo el 27 de marzo de 2018 e instauró la demanda el 14 de diciembre de 2020. Por ello y en razón a la excepción de prescripción propuesta por la demandada Colpensiones, se ordenará un retroactivo pensional a partir del 27 de marzo de 2015, así:

AÑO	IPC	# MESADAS	SMLMV	TOTAL
2015	6,77%	11,13	\$ 644.350	\$ 7.173.763
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	13,12%	14	\$ 1.000.000	\$ 14.000.000
2023		3	\$ 1.160.000	\$ 3.480.000
			TOTAL	\$ 92.173.775

Se ordenará a COLPENSIONES a seguir pagando a favor de la demandante a partir del 1 de abril de 2023 la mesada pensional por valor de \$ 1.160.000 con 14 mesadas anuales en los términos ordenados en la sentencia. COLPENSIONES descontará del valor del

retroactivo los aportes en salud, los que de acuerdo con la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, operan por mandato legal, sin necesidad de declaración judicial: (SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril).

Ahora bien, en este proceso se pretende además la CONDENA a INTERESES MORATORIOS o en subsidio INDEXACION: Sobre la procedencia de estos intereses en caso de retardo en el reconocimiento de la prestación, la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema ha sido pacífica y reitera la doctrina referida a que se generan por el retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional. (SL2941-2016) y se ha consolidado un precedente referido a unos casos precisos y excepcionales en los que no resulta procedente la condena a estos intereses, este se circunscribe a aquellos eventos la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación en el proceso obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podía prever.

Pues bien, en criterio de la Sala en este caso se presentan los presupuestos para exonerar a COLPENSIONES de la imposición de esta CONDENA, ante la diversidad de criterios entre las Altas Cortes sobre la materia máxime que los mismos están contemplados bajo una normatividad diferente a la que se aplicó para el reconocimiento de la prestación; pero se CONDENARÁ indexación, porque las sumas objeto de condena a favor de la demandante se han visto afectadas por la devaluación de la moneda y por eso, resulta procedente ordenar la actualización de su valor, la que debe ser liquidada por la entidad al momento del pago, atendiendo a la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la fecha en que haya de efectuarse el pago
ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada

VALOR A INDEXAR que se refiere al monto de cada mensualidad

Si bien se REVOCA la sentencia en su totalidad en virtud del RECURSO DE APELACION de la demandante, en criterio de la Sala, y atendiendo a las particularidades de este caso concreto resulta procedente la condena en costas en primera instancia a cargo del Municipio de Girardota.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos de apelación y revisada la providencia en el grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA íntegramente la providencia impugnada y en su lugar FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que a la señora MARIA CONSUELO CARMONA DE HENAO le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge PEDRO PABLO HENAO CASTRILLÓN acaecida el 8 de octubre de 1983 en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 3041 de 1966.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar en favor de la señora MARIA CONSUELO CARMONA DE HENAO por concepto de retroactivo pensional la suma de \$ 92.173.775 suma de la cual se autorizan los descuentos en salud. A partir del 1 de abril de 2023 Colpensiones continuará reconociendo una mesada pensional a la

demandante en el equivalente al SMLMV por 14 mesadas al año y sin perjuicio de los incrementos anuales legales.

TERCERO: CONDENAR al MUNICIPIO DE GIRARDOTA constituir en favor de Colpensiones cálculo actuarial por el período comprendido entre el 22 de agosto de 1977 y el 8 de octubre de 1983 previa liquidación que esta última realice, cálculo que será pagado 30 días hábiles posteriores a la elaboración de la liquidación y una vez se encuentre ejecutoriada esta providencia.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas causadas con anterioridad al 27 de marzo de 2015.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de los intereses moratorios y en su lugar se ordena la indexación de la condena conforme a las consideraciones expuestas.

SEXTO: Constan en primera a cargo del Municipio de Girardota; en segunda instancia, no se causaron.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

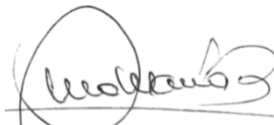
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-**015-2020-00464-01**
Demandante: **MARIA CONSUELO CARMONA DE HENAO**
Demandados: **COLPENSIONES Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA**
Decisión: **REVOCA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de marzo de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO